

La objeción de conciencia, es normal en países democráticos

Entrevista con el profesor Rafael Palomino

El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, a raíz de la reciente aprobación por el Congreso de los Diputados del denominado —con notable tergiversación incluso semántica— “matrimonio” de homosexuales, afirma en una Nota que «cada cual podrá reivindicar el derecho a la objeción de conciencia» para negarse a aplicar esa normativa (ver en DP). Días antes, ya el Cardenal López Trujillo, Presidente del Consejo Pontificio para la Familia, había aconsejado lo mismo a jueces y ediles municipales para no officiar uniones tan desatinadas. La objeción de conciencia, pues, ha cobrado de nuevo protagonismo. Un experto en el tema, Rafael Palomino, Profesor Titular de Derecho Eclesiástico del Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, nos lo ilustra en esta entrevista. Es autor, entre otros, de *Las objeciones de conciencia. Conflictos entre conciencia y ley en el Derecho norteamericano* (1994) y, con el profesor Navarro-Valls, de *Estado y Religión. Textos para una reflexión crítica* (2003).

Por José Ramón Pérez Arangüena



El profesor Rafael Palomino.

—Profesor. Se habla mucho de la objeción de conciencia en relación con las uniones entre homosexuales. Pero antes, ¿qué es la objeción de conciencia?

—La Constitución Europea, en su artículo II-70, afirma: «Se reconoce el derecho a la objeción de conciencia de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio».

Tengo la impresión de que en el debate de estos días se han confundido mucho los términos, en un *puzzle* de tecnicismos curiosos, de ininteligibles armas verbales arrojadas: llamadas a la objeción de conciencia “católica”, a la desobediencia civil, a la anarquía, a la aceptación o no de la objeción por el poder político cuando las leyes son democráticas, y un largo etcétera. Así no hay quien se aclare. Sin embargo, todo es más sencillo de lo que parece.

Para empezar: la objeción de conciencia es negarse a cumplir una obligación legal. Así de simple. Y si tuviera que matizar más, diría que es una *omisión*. Por tanto, una desobediencia al *Derecho del Estado*, que suele pasar inadvertida porque carece de los tintes llamativos de una acción subversiva por motivos axiológicos o morales.

La objeción no es lo mismo que la desobediencia civil, que consiste en realizar actos ilegales, públicos y no violentos, con la intención de frustrar leyes —al menos una— o decisiones de gobierno. Ejemplo típico es el de **Mohandas Gandhi**, cuando en 1930 organizó la “marcha de la sal”, para mostrar que las leyes británicas de dominio colonial eran absurdas y conseguir la independencia de La India.

En cambio, cuando **Tomás Moro** se negó a acatar la ley de 1534, que obligaba a reconocer como herederos legítimos al trono inglés a los hijos de **Enrique VIII** y **Ana Bolena**, ejerció objeción de conciencia. Pero ¡jojo!, **Moro** fue fiel al rey en todo lo demás. Por eso pudo afirmar: “*muelo como siervo del rey, pero primero de Dios*”. Lo malo es que **Enrique VIII** no era muy sensible a esos matices.

El caso que nos ocupa es objeción de conciencia, no desobediencia civil. Los jueces y alcaldes atienden a una ley superior, la de la coherencia con su propia conciencia, antes que acatar otra que consideran lesiva, al menos para sí mismos como personas y ciudadanos. Pero ¡jojo! aquí de nuevo: no son autómatas de las directrices del Vaticano. Digo yo que serán seres inteligentes, pues por algo son jueces y alcaldes.

RESPALDO JURÍDICO

—Aparte de esos motivos morales, ¿tiene la objeción algún respaldo jurídico?

—Los países democráticos de nuestro entorno cultural han ido asimilando la objeción de conciencia a través de diversas vías, hasta reconducirla hacia la normalidad jurídica. Curiosamente, la incorporación de nuevos países a una cultura abierta a los derechos humanos suele tener en esa objeción un *punto fuerte* de regulación y una *pedra de toque* de progreso. Pienso en las dificultades que encontró la objeción militar en los países del Este europeo tras la caída del Muro de Berlín, o en las reticencias del Estado

mexicano para admitir el rechazo de los alumnos *Testigos de Jehová* al saludo patriótico a la bandera.

El Estado democrático entiende que la disensión controlada tiene cabida en el Derecho. De ahí que otorgue un *status* de normalidad a la objeción, sea por la vía del cumplimiento de otros deberes, como la prestación sustitutoria del servicio militar; o por la de ofrecer alternativas: jurar o prometer; o por la simple exención, en el caso del aborto.

REGULACIÓN DE LA OBJECCIÓN

—¿Se ha articulado en España alguna ley reguladora de la objeción?

—Conforme a lo dicho por el Tribunal Constitucional, no cabe una ley general de objeción de conciencia. La legislación suele referirse a deberes concretos y, por otro lado, la existencia de una regulación depende del “peso histórico” o de la “frecuencia estadística” con que se produzca una forma concreta de objeción.

En España hubo un desarrollo legislativo —en distintas fases y con cierta complejidad— de la objeción al servicio militar obligatorio. Con la extinción de éste desapareció el grueso de esa legislación. Sólo subsiste cierto eco en el artículo 190 de la Ley de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas de 1999.

Se ven trazas de regulación legal en la normativa aplicable a quienes toman posesión de cargos o funciones públicas, ya que pueden *jurar* cumplir fielmente sus obligaciones, o bien *prometerlo* por su conciencia y honor.

También hay normas jurídicas que protegen, sin estar destinadas *ex profeso* a ello, el hipotético ejercicio de la objeción. Por ejemplo, la Ley del Jurado, que prevé exenciones para formar parte de uno de ellos.

Por lo general, la regulación normati-



El pleno del Congreso de los Diputados aprobó las uniones entre homosexuales el 21 de abril, por 183 votos a favor y 136 en contra.

va es escasa, y más frecuente en las formas de objeción ligadas al pacifismo, religioso o secular. En algunos países, el protagonismo lo tienen los tribunales, pues son los que deciden acerca de la protección constitucional que otorga la libertad de conciencia.

OBJECCIÓN Y DEMOCRACIA

—¿De verdad es coherente la objeción de conciencia con la democracia?

—Sin duda. Constituye una válvula de escape importantísima para dar cauce

de normalidad a lo que podemos denominar el «pacífico disenso democrático», fenómeno minoritario que a duras penas logra hacerse valer a través de la estructura de partidos y representaciones parlamentarias, cada vez más compleja

y alejada del ciudadano.

Cuando se desoyen las demandas fundadas en la conciencia, sólo caben estas dos explicaciones: una, que el poder político considera que no puede existir ninguna instancia social de obediencia por encima de sus leyes, lo que le auto-corona como un nuevo *dios*; u otra, que su miopía positivista le lleva a no ver más ley que su propia ley, ni más derecho que su derecho.

¿Estamos convirtiendo, inconscientemente, a la voluntad de la mayoría en la voluntad de ese nuevo *dios*? Si esto es así, a la larga genera totalitarismos. En cam-

bio, la cantidad y calidad de objeción de conciencia indica el grado de democracia existente en un país.

USO FRAUDULENTO

—¿No puede usarse a veces como una trampa, para actuar por motivos de conveniencia personal?

—Efectivamente, así puede suceder en las formas de objeción que aportan una exención “beneficiosa” para todos los ciudadanos. Ejemplo

típico es la *mili*, respecto a la que es muy fácil pasar de la “objeción de conciencia” a la “de conveniencia”, ya que eludir la supone obtener claras ventajas —tiempo para los estudios, oportunidades de trabajo, etcétera— sobre el que tiene que hacerla. Por esta razón, entre otras, en muchos países está prevista una prestación sustitutoria.

Ahora bien, si un tipo de objeción no reporta ventajas, entonces no hay posibilidad de trampa, sencillamente porque no tiene sentido. Es más, a veces se ha “penalizado” de algún modo al objetor, por negarse a realizar una determinada actividad. Ciertamente, esto constituye una intolerable discriminación, que los tribunales han reconocido en varias sentencias.

Recuerdo una dictada en 1991 aquí, en España. Se trataba de un médico anestesista que había opuesto cláusula de conciencia para no practicar abortos en su hospital. Un día, con la excusa de remodelar los equipos de trabajo, se le transfirió a otra unidad, con pérdida de categoría laboral. Pues bien, demostró la vinculación del traslado con su objeción y el Tribunal Supremo falló a su favor, considerando que había sido ilegítimamente discriminado por motivos ideológicos o religiosos.

Desde luego, en el caso de las uniones entre homosexuales, no hay temor de lograr “ventaja” alguna, salvo la de la propia coherencia.

PROLIFERACIÓN

—A partir de la objeción al servicio militar, parece que se han multiplicado los supuestos en que ejercerla.

—En efecto. Inicialmente, esa obje-

Si no cabe la objeción de conciencia para cumplir una ley aprobada, ¿dónde entonces? ¿Sólo frente a los bandos municipales?

ción la plantean colectivos pacifistas de raíz religiosa. Pero luego ese pacifismo se "seculariza" y llega a quienes rechazan la *mili* por razones filosóficas o ideológicas, e incluso a la objeción fiscal contra las exacciones tributarias para financiar guerras. El pacifismo alcanzará también la vida del no nacido, con la objeción al aborto esgrimida tanto por quienes no efectúan una "cooperación directa" de tipo sanitario, como por el personal administrativo de hospitales del Reino Unido.

En ocasiones, dos tipos de objeción se "encuentran". Por ejemplo, la objeción fiscal y la objeción al aborto en el caso del rechazo a los gastos sanitarios que éste provoca, o la de los farmacéuticos franceses para expedir la píldora abortiva RU 486. Hace apenas unas semanas, en Esta-

dos Unidos saltó a los periódicos otra semejante, pues Arizona ha aprobado una cláusula de conciencia que protege a los farmacéuticos de la obligación de expender píldoras abortivas.

La instauración de nuevos deberes legales o cívicos, como el de formar parte de un jurado o de una mesa electoral, incrementa los rechazos. Casi siempre minoritarios, pero significativos.

CAUSAS Y ESTADÍSTICAS

—¿A qué se debe este incremento?

—Es una reacción multidireccional, que tiene causas muy diversas. Por un lado, el pluralismo social reclama espacios de inmunidad y de libertad frente a la asfixiante normativa del Estado de bienestar. Así, algunos colectivos minoritarios religiosos rechazan el pago de las cuotas de la Seguridad Social, sencillamente porque cuidar a los enfermos, ancianos y desvalidos constituye para ellos un deber de primer orden, que sería inmoral delegar en la sanidad pública. Los tribunales y legisladores han reconocido como legítima esa objeción fiscal.

La objeción es una realidad jurídica, esté o no reconocida, que hunde sus raíces en la libertad ideológica y religiosa

Por otro lado, en la medida en que el Estado invade progresivamente nuevas zonas de actuación, termina chocando con las creencias, modos de vida y pautas de conciencia de sus ciudadanos. Y si ese poder político, influido por el laicismo filosófico, impone además un modo particular de entender lo social y lo político, entonces el choque conduce a la objeción de conciencia. O a la marginación de la disidencia pacífica.

—¿Hay datos sobre el número de objetores?

—Sólo en sectores concretos, como la objeción militar en España. Sabemos que aumentó mucho con motivo de la primera Guerra del Golfo y que, en los últimos años de la *mili* obligatoria, la legislación fue insuficiente para atender el aluvión de

solicitudes. Respecto al aborto, sabemos que se acogen a la objeción el 90 ó 95 % de los médicos españoles. Y en relación con las exigencias de vestuario en la empresa o en la escuela, hay informes recientes de Francia.

En general, recabar datos sobre el tema no es fácil, sobre todo porque las formas menos consolidadas de objeción son fenómenos muy minoritarios.

DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL

—En España, ¿qué ha dicho el Tribunal Constitucional sobre la objeción de conciencia?

—Nuestro Tribunal Constitucional afirma tres cosas que interesa tener en cuenta. Por un lado, en 1985, con motivo del recurso previo de inconstitucionalidad 53/1983 sobre la reforma del Código Penal para la despenalización del aborto, dice en su fundamento jurídico 14: «La objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocida por el artículo 16.1 de la Constitución y, como ha indicado este Tribunal en diversas ocasiones, la Constitución es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales».

Esta afirmación debe coordinarse con otra, aparentemente contradictoria, que el mismo Tribunal realiza en

una sentencia de 1987: «La objeción de conciencia con carácter general, es decir, el derecho a ser eximido del cumplimiento de los deberes constitucionales o legales por resultar ese cumplimiento contrario a las propias convicciones, no está reconocido ni cabe imaginar que lo estuviera en nuestro Derecho o en Derecho alguno, pues significaría la negación misma de la idea de Estado. Lo que puede ocurrir es que se admita excepcionalmente respecto a un deber concreto».

Añadamos algo más, esta vez de otra sentencia de 1987 referida a la objeción militar y a la insumisión: «Es justamente su naturaleza excepcional —derecho a una exención de norma general, a un deber constitucional, como es el de la defensa de España— lo que le caracteriza como derecho constitucional autónomo, pero no fundamental, y lo que legitima al

legislador para regularlo por Ley ordinaria "con las debidas garantías", que, si por un lado son debidas al objetor, vienen asimismo determinadas por las exigencias defensivas de la comunidad como bien constitucional».

Estas tres afirmaciones parecen incompatibles entre sí, pero realmente no lo son. ¿Por qué? Partamos de la base de que la objeción de conciencia es una realidad jurídica, esté o no reconocida, que hunde sus raíces en la libertad ideológica y religiosa. Pues bien, si un Estado tiene un mínimo de sensibilidad hacia las derivaciones más genuinas y radicales de esa libertad ideológica y religiosa, entonces ha de buscar cauces para amparar mediante exenciones ese rechazo del deber normativamente impuesto.

En mi opinión, esto mismo, y no otra cosa, es lo que exige la Constitución Europea en su artículo II-70. ■

LOS JUECES Y LAS UNIONES HOMOSEXUALES

—Respecto ya a las uniones entre homosexuales, ¿podrían los jueces oponer objeción de legalidad?

—Se ha hablado bastante de este asunto. Desde luego, si un juez decide en un procedimiento judicial plantear la cuestión de constitucionalidad —por ejemplo, en un procedimiento en el que ventila la responsabilidad de un colega por negarse a cumplir la citada ley—, entraría en el radio de acción del artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y podría detener la aplicación de la

ley para ese caso concreto hasta que el Tribunal Constitucional resolviera. Es decir, podría plantear la llamada "objeción de legalidad" cuando, llamado a aplicar la ley en un procedimiento de base judicial, entiende que esa ley es inconstitucional.

También se ha formulado la posibilidad de que plantee esta "objeción de legalidad" a la hora de aplicar la ley en la autorización de un matrimonio civil. Desde mi punto de vista, esta posibilidad de objeción de legalidad directa es mucho más dudosa. Dependería de que el Tribunal Constitucional hiciera una interpretación extensiva del citado artículo 35, lo cual no me parece demasiado viable.

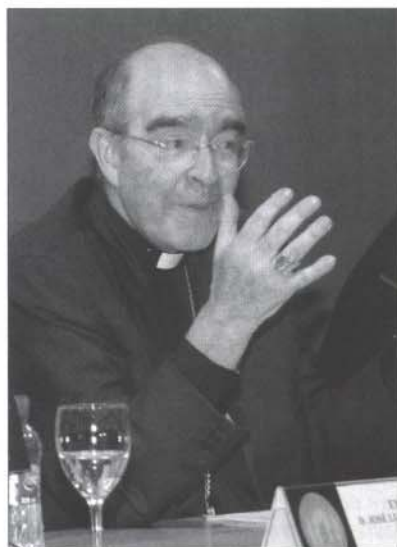
Casi me resulta más sencilla la posibilidad de que sean las propias cámaras legislativas las que formulen la "objeción de legalidad", a través del recurso de inconstitucionalidad presentado por cincuenta diputados u otros tantos senadores. A partir de ahí cabría plantear, como ya se hizo cuando se despenalizó el aborto, la necesidad de que la objeción de conciencia de los jueces a participar en "matrimonios" entre homosexuales figure en la ley, y pueda ser ejercida.

ALCALDES Y CONCEJALES

—¿Tendrían esa opción los alcaldes y concejales?

—Su situación no es estrictamente la misma, ya que no son funcionarios, sino cargos políticos cuya competencia se pone en acto si en el municipio no hay juez encargado del registro civil, o si los contrayentes los eligen por encima del juez. Así lo determina una Instrucción de 1995 de la Dirección General de los Registros.

Por el momento, se habla de que podrían delegar habitualmente en otros miembros de la corporación que no tengan reparos. Si la competencia que les otorga el artículo 51 del Código Civil implica también una obligación legal de celebrar matrimonios, cuestión ésta que algunos expertos ponen en duda, incluso en tal caso tendrían



El Cardenal López Trujillo. La Vicepresidenta Fernández de la Vega.



su gesto radican en que atiende al cumplimiento de "otras leyes" superiores a las del poder político. Y a la larga, como comprueba la sociología jurídica, la represión no elimina las objeciones, sino que las consolida cada vez más.

POLÉMICA

—La Vicepresidenta del Gobierno respondió de primeras al Cardenal López Trujillo que "no cabe alegar la objeción de conciencia para cumplir una ley aprobada". El Ministro de Justicia y otros lo han reiterado

después. ¿Qué opina de esas declaraciones?

—Desde el punto de vista jurídico, la afirmación resulta matizable, ya que la objeción de conciencia existe con independencia de que la ley la proteja o no. Si no cabe la objeción para cumplir una ley aprobada, ¿dónde entonces? ¿Sólo frente a los bandos municipales?

No corresponde al derecho o a la ley del Estado decidir cuándo y cómo existe un deber moral, o cuándo y cómo se debe ser fiel a la propia conciencia.

La objeción, particularmente la de los jueces, carecerá en este caso de protección legal directa, si al Parlamento le falta el suficiente tacto y sensibilidad —jurídica y moral— para establecer una cláusula de exención.

Dinamarca ha introducido en su ley de "parejas de hecho" —prácticamente idéntica a la española de que hablamos— unas garantías para defender la conciencia de quienes intervienen. Así, deniega a las

uniones de homosexuales algo que reconoce al matrimonio normal: la elección entre una ceremonia religiosa o civil. Precisamente para que los pastores de la iglesia luterana oficial, cuya condición es equiparable a la de los funcionarios, no se vean compelidos a atender tales uniones.

—El Cardenal ha insistido en que negar el derecho a la objeción sería un gesto "totalitario".

—Desde luego, rechazarla de plano, como parecen hacerlo algunos políticos, es un gesto propio de regímenes y mentalidades totalitarias, que creen poseer la verdad absoluta y no dudan en imponerla. ■

derecho a no intervenir en la unión de homosexuales solicitada.

POSIBLES SANCIONES

—Pero en la práctica, ¿no les puede acarrear inconvenientes?

—Ahora mismo, si la ley que se pretende aprobar mantiene su tenor literal, así es. La objeción de conciencia de los jueces no recibe ningún amparo legal, y traerá serios inconvenientes.

En mi opinión, será difícil que llegue a castigarse como delito, pues no comparto la tesis —sostenida en parte por alguna asociación de jueces— de que se produciría prevaricación. Me basta leer con detenimiento el Código Penal. Sin embargo, sí habrá sanciones disciplinarias, conforme al artículo 417 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El objeto, sin duda, se arriesga a sufrir las sanciones que prevea el Derecho del Estado. Pero la grandeza y la fuerza de



Hasta que se suprimió, la mili obligatoria suscitó muchas objeciones de conciencia. En la foto, de 1998, dos jóvenes de Elche preparan una marcha en contra de aquélla.